

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia  
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Concepción  
CAUSA ROL : C-7000-2019  
CARATULADO : GARCÍA/FISCO DE CHILE

Concepción, veintinueve de abril de dos mil veintidós

VISTO:

Que, en el folio 1, se presenta el letrado don Juan Pablo Gallardo Parada en representación de doña **SARA ROZAS GARCÍA SAN MARTÍN** (sic), labores de casa, con domicilio en Villa Padre Hurtado, Block i, departamento 212, comuna de Bulnes; quien interpone demanda civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del **Estado**, persona jurídica de derecho público, representada por el Consejo de Defensa del Estado, a través de su Abogado Procurador Fiscal don Georgy Schubert Studer, o quien lo subrogue o reemplace en el cargo, todos con domicilio en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1.129, Cuarto piso, comuna de Concepción; por haber sometido a detención y prisión arbitraria e ilegal, torturas y apremios físicos y psíquicos a su representada, cuyas graves consecuencias permanecen hasta el día de hoy.

Funda su demanda relatando que su representada es viuda de Flavio Hernán Sepúlveda Sepúlveda, quien fue detenido el 11 de septiembre –no indica de qué año- a la edad de 17 años y durante 9 meses.

Indica que él estaba inscrito en el Partido Socialista, siendo acusado de tener dinamita y pistolas. Dice que su representada en ese entonces aún pololeaba con él, pero fue amenazada muchas veces por teléfono porque lo iba ver a la cárcel de Chillán. Refiere que su representada era joven y que cuando lo veía en la cárcel era terrible porque estaba con la cara rota, morada, los ojos cerrados, pelado al rape, muy torturado, tenía quemaduras en toda la espalda y quedó con una cicatriz en la cara.

Indica que él estaba preso en la cárcel de Chillán pero una vez a la semana iban a buscar gente para interrogar en el regimiento, lo elegían casi siempre y lo sometían a los apremios ilegítimos que relata; dice que volvía 3 días después, hecho pedazos y que salió de la cárcel porque lo defendió la Vicaria de la Solidaridad. Agrega que después de salir era tomado preso constantemente, se le llevaba a la Comisaría de Santa Clara durante 48 horas sin agua ni alimentación.

Sostiene que durante dos años después de salir de la cárcel no pudo estudiar, porque no lo dejaban, decían que era terrorista y altamente peligroso.

Expone que en el año 1980 su representada se casó y que el daño psicológico debe haber sido muy grande para él, porque se ponía violento con ella. Indica que su



representada tuvo que ir al psicólogo, le dio depresión, que su matrimonio era muy amoroso, pero había etapas horribles.

Agrega que con los hijos tenía poca paciencia, le costaba mucho expresarles sus sentimientos, hacerles cariño.

Hace presente que don Flavio Hernán Sepúlveda Sepúlveda falleció el día 13 de abril del año 2014.

Prosigue con que el cónyuge fallecido de su representada fue privado de libertad siendo aún menor de edad, desde el mes de septiembre hasta el mes de mayo de 1974 y que fue sometido sistemáticamente a torturas de las cuales no se recuperó hasta su muerte.

Afirma que, una vez puesto en libertad, fue constantemente acosado, no se le permitió trabajar ni estudiar, aislado de la sociedad, no se le permitía desplazarse por el territorio nacional libremente, es decir, fue víctima de un acoso y asedio constante que destruyó tanto su vida como la de su familia.

Señala que los hechos descritos se encuentran reconocidos por el Estado de Chile; según consta en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) del Estado de Chile. Figurando don Flavio Hernán Sepúlveda Sepúlveda, en la lista de víctimas reconocidas por dicha comisión bajo el **número 23.146**, todo lo cual dejó serias secuelas físicas y síquicas de carácter irreversibles.

Explica que la actora demanda el daño moral propio sufrido a raíz de su propia detención ilegal (sic) y demás actos lesivos en contra de su marido, entendido como el daño moral que le causó conocer y sufrir la detención ilegal de su cónyuge, el que además repercutió en su persona toda vez que sufrió en carne propia el desamparo que esta situación generó; y además, el daño moral sufrido directamente por este último, en calidad de heredera del causante.

Luego, invoca los fundamentos de Derecho, indicando que se transgredió la Constitución de 1925 y numerosa legislación internacional, entre ellas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Señala que la presente demanda se asila también en la actual Constitución e invoca la responsabilidad civil del Estado, toda vez que sus agentes premunidos de la fuerza coactiva que éste les entregó cometieron actos delictuales, transgrediendo la normativa invocada.

Luego cita jurisprudencia que estima aplicable al caso.

Prosigue con que la responsabilidad civil del Estado, se verifica y concretiza mediante el concepto de falta de servicio, al cual resulta aplicable también las normas de derecho común en cuanto no sean incompatible con él aquel estatuto jurídico.

En definitiva, en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en las normas legales que cita, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual del Estado, representado por el **Consejo de**



**Defensa del Estado**, por el daño moral sufrido directamente por la actora, y en concreto se le condene a pagar a doña **SARA ROSA GARCÍA SAN MARTÍN**, la suma de \$150.000.000; y la suma de \$250.000.000 como heredera del daño moral sufrido por su cónyuge don **FLAVIO HERNÁN SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA**, pudiendo acoger la demanda por cualquiera de ambos conceptos indistintamente.

En subsidio, las sumas menores que el tribunal determine conforme al mérito del proceso y, en cualquiera de ambos casos, con costas, con reajustes e intereses corrientes desde la fecha de dictación de esta sentencia, o en subsidio, con reajustes e intereses que el tribunal determine conforme a Derecho.

En el folio 7, el demandado contestó la acción interpuesta solicitando su rechazo, con costas.

En primer término, opone la excepción de falta de legitimación activa e indica que la demandante no figura en el listado de víctimas denominado Informe Valech, motivo por el que controvierte su calidad de víctima y titular de la acción indemnizatoria por delitos de lesa humanidad, recayendo sobre la demandante la obligación de acreditar su calidad de víctima y su legitimación para ejercer la acción de autos.

Luego, opone la excepción de intransmisibilidad del daño moral, señalando que en la demanda no se indica si la causa de pedir es la indemnización por repercusión, o por el daño de la propia víctima o por ambos. Agrega que se deduce que es por ambos.

Sostiene que la doctrina ha señalado que, dadas las características del daño moral y que lo que se pretende con su indemnización es procurar en lo posible la satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha causado, cabe entender que su reparación sólo es posible en la persona que lo ha padecido.

Agrega que por las características propias de la institución, cual es el sufrimiento personal, tal daño no se transmite, por lo que no resulta aceptable que los herederos lo demanden.

Luego cita jurisprudencia en dicho sentido.

Después en subsidio, opone la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizado el causante de la actora, por cuanto don Flavio Hernán Sepúlveda Sepúlveda, fue incluido en el informe Valech, como víctima de violación de derechos humanos.

Prosigue haciendo presente las negociaciones entre el Estado y las víctimas y la reparación de los daños sufridos, además de programas de reparación propuestos por las Comisiones de Verdad y Reconciliación, los que incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero, mencionando al efecto la Ley 19.123 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación o también llamada Comisión Rettig, que en su informe propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una pensión única y algunas prestaciones de salud, mensaje que fue claro al expresar que



por él se buscaba, en términos generales, reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas.

Señala que la compensación de daños morales y mejora patrimonial son claros objetivos de estas normas reparatorias, y que las Leyes 19.123 y 19.992 -referida a las víctimas de tortura- han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado tal compensación, y que son de tres tipos:

a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero, caso en el cual el actor ha recibido beneficios pecuniarios como los son una pensión anual de reparación, además de otros beneficios, señalando para los menores de 70 años una pensión de \$1.353.798;

b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, y en este sentido, indica, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país. Agrega que PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del programa, compuesto en su mayoría por médicos, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales encargados de evaluar la magnitud de los daños y diseñar un plan de intervención integral. Además, se establecen beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios y superiores, y se conceden beneficios en vivienda, correspondientes a subsidios de vivienda; y

c) reparaciones simbólicas, que consisten en actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones, para reducir el daño moral, como lo son la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en el año 1993; el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido; Construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; el establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos; la Construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las infracciones a los Derechos Humanos, y un sinnúmero de obras menores tales como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, etc.

Indica, respecto a la identidad de causa entre lo que se pide en autos y las reparaciones realizadas, que el Estado ha realizado esfuerzos para reparar a las víctimas y no sólo ha cumplido con todos los estándares internacionales de justicia transicional sino que ha provisto indemnizaciones razonables en relación con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas de los daños, tanto morales como patrimoniales. Por lo anterior, señala, la indemnización solicitada en autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas, pretende compensar el mismo daño ocasionado por los mismos hechos, por tanto no pueden ser exigidos nuevamente y en este mismo sentido así se ha resuelto en diversos fallos dictados por los tribunales, siendo esta política de reparación valorada por órganos internacionales de



importancia como la Corte Interamericana de Justicia, por lo que estando la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas y al tenor de los documentos oficiales es que opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante.

En subsidio de lo anterior, alega la excepción de prescripción extintiva, señalando que opone la referida excepción con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo código, solicitando se rechace la demanda en todas sus partes, ya que a la fecha de notificación de la demanda, 15 de octubre de 2019, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil, considerando que los hechos en que se funda la demanda habrían ocurrido desde el día 11 de septiembre de 1973.

En subsidio, opone la excepción de prescripción ordinaria de cinco años contemplada para las acciones y derechos del artículo 2.515 en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho de indemnización a la fecha de notificación de la demanda, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Acto seguido, refiere jurisprudencia sobre prescripción señalando sentencias dictadas al respecto y normas contenidas en el Derecho Internacional, como asimismo que el planteamiento de su parte ha sido reconocido por el más alto Tribunal del país, por lo que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad en materia penal, el tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos referidos.

En subsidio, en cuanto al daño e indemnización pretendida, señala que el daño moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerando o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, y en esa perspectiva se debe regular el monto de la indemnización, sin que pueda ser fuente de lucro o ganancia, sino un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida, tampoco puede ser procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado, como elemento para fijar la cuantía.

En subsidio, en relación a lo señalado, sostiene que el daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado por parte del actor, conforme a las leyes de reparación



ya invocadas y que seguirá percibiendo a título de pensión, pues lo contrario implicaría un doble pago.

Hace presente que, para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido, los montos establecidas en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos demandados.

Sobre los reajustes e intereses, indica que éstos son procedentes sólo en el caso de que la sentencia que se dicte acoja la demanda y establezca esa obligación y, además, desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

En el folio 13, se replicó.

En el folio 15, se duplicó.

En el folio 19, se recibió la causa a prueba.

En el folio 37, se decretó la reactivación del término probatorio, cumpliéndose con la notificación ordenada el 13 de octubre de 2021.

En el folio 85, se citó a las partes para oír sentencia.

#### **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

1º.- Que, conforme a lo expositivo precedente, la acción indemnizatoria entablada por la demandante en contra del Fisco de Chile, se funda, en síntesis, en el hecho de que su cónyuge fue detenido político y torturado por agentes del Estado desde septiembre de 1973 hasta mayo de 1974, habiéndole sido reconocida dicha calidad a través de su inclusión en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; solicitando la reparación del daño moral que se le causó a causa de la detención de su marido, como también el daño moral propio de éste, el que le habría transmitido al fallecer.

Cabe señalar que en la demanda se indica, en el último párrafo del acápite “DAÑOS”, página 5, que la actora demanda “...*el daño moral propio, sufrido **a raíz de su propia detención ilegal** y demás actos lesivos en contra de su marido...y además el daño moral sufrido directamente por este último, en calidad de heredera del causante*”, entendiendo el tribunal que se refiere a la detención sufrida por don Flavio Sepúlveda y no dice relación con la demandante, ya que en parte alguna del libelo se hace mención a alguna detención sufrida por ésta última.

2º.- Que, el Fisco de Chile, pide el rechazo de la demanda, oponiendo en primer lugar, la falta de legitimación activa, toda vez que la demandante no figura como víctima de prisión política y tortura en el Informe Valech, por lo que carece de legitimación activa para demandar al Fisco y, en segundo lugar, la excepción de intrasmisibilidad del daño moral reflexionando sobre la imposibilidad que a la actora se le transmita el daño moral sufrido por la víctima. En subsidio, opone la excepción de reparación satisfactiva, o sea, pago, en razón de que el padre y marido de los demandantes sería beneficiario de las leyes de reparación dictadas con objeto de indemnizar los daños causados en materia



de derechos humanos en el país; además, interpone excepción de prescripción al estimar que las acciones indemnizatorias de esta clase prescriben en 4 años contados desde la restauración de la democracia al país; en subsidio, la prescripción de 5 años. Cuestiona, por otro lado, el monto de la indemnización pretendida y que de darse lugar a ella debiera ser rebajada atendidas las leyes de reparación de que fue beneficiario el cónyuge de la demandante; considerando improcedente el pago de reajustes e intereses en la forma pedida.

**3º.-** Que, son hechos incontrovertidos y además corroborados por la prueba rendida, por ende, establecidos del pleito que don Flavio Hernán Sepúlveda Sepúlveda fue detenido en Bulnes y torturado por sus captores, agentes del Estado, en época de Dictadura, siendo trasladado a la Cárcel Chillán donde permaneció privado de libertad, siendo reconocido a través del Informe de la Comisión Nacional sobre Política y Tortura como víctima de privación de libertad y torturas por razones política, figurando incluido don Flavio Hernán Sepúlveda Sepúlveda bajo el N°23.146 (folio 22), lo que es reconocido por la parte demandada.

**4º.-** Que, en prueba de sus alegaciones, la parte demandante acompañó, sin objeción de contrario, la siguiente documental:

a) **certificado de matrimonio** de la demandante Sara Rosa García San Martín con don Flavio Hernán Sepúlveda Sepúlveda, donde se señala que el matrimonio fue celebrado el 15 de febrero de 1980.

b) **certificado de defunción** de don Flavio Hernán Sepúlveda Sepúlveda, RUN 7.380.973-8, que da cuenta que éste falleció el 13 de abril de 2014 (folio 1 y 31).

Además, acompañó sin objeción de contrario, la documental rolante a folio 31, consistente en:

c) **certificado N°56/16 de Gendarmería de Chile**, en donde se señala que el Jefe de la Oficina de Registro y Movimiento de la Población Penal, del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, certifica que Sepúlveda Sepúlveda Flavio Hernán, C.I: 7.380.973-8, ingresó a esa Unidad Penal el 23 de enero de 1974 por Infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado y egresó el 17 de abril de 1974;

d) **comprobante de ingreso de antecedentes en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura** de Flavio Hernán Sepúlveda Sepúlveda;

e) **certificación de Gendarmería de Chile**, en la que se señala que el Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Bulnes, certifica que don Flavio Hernán Sepúlveda Sepúlveda, cédula de identidad 7.380.973-8, registra su ingreso a ese Establecimiento Penal, con fecha 11 de septiembre de 1973, en calidad de detenido por Infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, enviado por el Sr. Capitán Comisario Jefe de Plaza.

Asimismo, rindió la testimonial rolante en el folio 82, consistente en los dichos de doña **Fidelisa del Carmen Manríquez Ramírez** y de doña **Juana María Bizama Vidal**, quienes legalmente examinadas, sin tachas, señalaron:



**La primera:** que conoce a la señora Sara García y sabe que eran de Bulnes. Señala que su esposo fue detenido en la Comisaria de Bulnes y posterior a la cárcel de Chillan; que fue brutalmente agredido, él era un joven de 17 años de edad, ya que fue complicado lo que ocurrió en el año 73; que ella conocía muy bien al marido de la Sra. y sabe que pasaron muchas penas y situaciones que no se pueden ni siquiera contar; que lo conoció porque eran de Bulnes y en ese momento eran muy pocos y compartían como comunidad; que también eran un grupo de amigos de esa época; que fue en el mes de septiembre de 1973, estuvo 9 meses detenido, fue detenido por Carabineros de Chile de Bulnes cuando se inició el Golpe de Estado en septiembre; que él fue llevado a la comisaria de Bulnes y luego a Chillan para terminar en el regimiento de Chillan; que fue golpeado en el cuerpo y en la cara tenía cicatrices, le aplicaban electricidad y una serie de torturas; que estuvo detenido 9 meses, quedando libre con restricciones porque no se podía salir, no lo autorizaban a salir, en cualquier momento iban a la casa, se le prohibía hablarle a la gente detenida, no se le podía visitar; que él quedó con secuelas como temor a salir a la calle, a ver uniformados, no poder retomar los estudios, psicológicamente mal ya que se arrastró por años; que tenía 17 años al ser detenido, él estudió en el liceo, era un menor de edad, tuvo depresión; que ellos fiscalizaban su casa, por quien era controlado siempre y todo eso le afectó al no poder seguir con su vida en forma normal; que la situación no se puede dimensionar, era terrible había que estar en ese momento para poder entender lo que vivió; que tenía cicatrices físicas fuera de las secuelas, cicatrices en el hombro; que él contó con el apoyo de su familia después que quedó en libertad, porque él, era controlado ya que los llevaban a la comisaría porque pensaban que era un peligro para la sociedad, el control fue permanente durante años; que don Flavio Hernán Sepúlveda Sepúlveda, murió al parecer por los golpes porque fue muy golpeado y no le cabe ninguna duda que su muerte fue producto de los golpes que recibió; que él muchas veces golpeó a Sara porque quedó con daños y quedó agresivo, no se podía hablar de algunos temas porque esta gente no recibió ningún tipo ayuda y generó conductas de violencia hacia su familia, cree que no hay palabras para graficar la situación que esas personas acumularon con esos golpes; que Carabineros tenía una lista donde buscaban a las personas para detenerlas, Bulnes está registrado como uno de los centros de torturas en la región.

**La segunda testigo declara:** que conoce a la señora García y a don Flavio Sepúlveda Sepúlveda, cuando iban a la cárcel ya que ambas iban a ver a sus esposos y ahí supo su historia, él fue detenido el 11 de septiembre de 1973; que lo que Sara le contaba fue que carabineros lo tomó y luego fue llevado a Chillan, fue detenido por carabineros; que durante su detención como ocurrió con los presos políticos que fueron torturados, eran sacados de la cárcel y lo llevaban al regimiento en Chillan, allí fue terrible y duro; que lo torturaban con corriente, con golpes en el cuerpo, quedó con cicatrices, fue terrible lo que hacían en Chillan, estuvo detenido como 9 meses; que quedó con marcas en el cuerpo en la espalda y la parte dolorosa que venía después que





tenía que estar encerrado, lo volvieron a tomar después otra vez; que él quedo muy agresivo con depresión, con cambios en su actuar por lo mismo, por las torturas que él recibió, después se casaron tuvieron sus hijos y Sara sufría mucho por los cambios de conductas, porque el daño fue para su esposa y sus hijos; que Sara sufrió antes y en su matrimonio ya que ambos tenían discusiones por su cambio de conducta y por ello Sara sufrió mucho; que Sara todavía está afectada por una depresión permanente, porque cada vez que se toma el tema ,lo recuerda, fue muy doloroso para ella; que don Flavio no podía salir a la calle, siempre era detenido, había una persecución permanente, era perseguido por carabineros; que la causa de muerte no la tiene clara porque después se separaron, cuando salió en libertad su esposo –de la testigo- sólo se dedicó a él, cada uno siguió su camino pero su muerte no la sabe, le da la impresión que fue producto de los golpes recibidos también; que don Flavio tenía la edad aproximada de 16 o 17 años al ser detenido.

Asimismo, se agregó el informe pericial rolante a folio 57, elaborado por la psicóloga jurídico-forense designada en autos doña Nora Lizama Novoa a nombre de la demandante, en el que se concluye que, bajo apreciación profesional y a partir de los hallazgos valorados en relación a evaluación psicológica realizada, es posible concluir que la peritada presentaría indicadores de daño intermitentes como sentimientos de angustia, desesperanza, frustración y anulación de contenidos amenazante al momento de rememorar experiencias de vida pasadas.

En cuanto a la instauración de daño con características de cronicidad se advierte la mantención de alteraciones en su estado de ánimo lo que ha sido objeto de atención médica desde hace aproximadamente 30 años contando con diagnóstico de Depresión y actualmente con experimentación de sintomatología tipo ansiosa leve.

En el análisis de factores relacionados, se aprecia un origen concausal puesto que habría estado expuesta a escenarios de riesgo y amenaza para su integridad a nivel familiar desde el inicio de su relación de pareja e indirectamente producto del contexto social de la época, año 1973. Por lo anterior, se aprecian fundamentos suficientes que permitirán aventurar dos de las hipótesis asociadas que darían cuenta que H1: La adulta evaluada presentaría indicadores psicológicos de daño asociados a vivencias no normativas dentro del contexto familiar, y H2: La adulta evaluada presentaría indicadores psicológicos de daño que se relacionan con otras situaciones experimentadas a lo largo de su historia vital y no se condicen con el contexto familiar.

Actualmente, la peritada si bien muestra percepción de integración respecto de sus vivencias pasadas queriendo reflejar una visión optimista de sus circunstancias actuales alberga sentimientos de insuficiencia y vulnerabilidad al no obtener reparación respecto del daño sufrido.

**5°.-** Que, por su parte, el demandado Fisco de Chile, hizo agregar el oficio de folio 17, en que la Unidad Valech, Rettig y Otras Leyes Reparatorias del Instituto de Previsión Social, informa que don Flavio Sepúlveda Sepúlveda, recibió beneficios de



reparación Ley 19.992, en su calidad de víctima de prisión política y tortura por un total de \$15.204.449.

**6.-** Que, respecto a la excepción de falta de legitimidad, sabido es que la acción es un derecho subjetivo autónomo dirigido a obtener una determinada resolución jurisdiccional, favorable a la petición del reclamante; de ahí que para que el actor triunfe en su demanda se requiere, primero, derecho, o sea, una norma de la ley que garantice al actor el bien que pretende; segundo, calidad, o sea, la identidad de la persona del actor con la persona favorecida por la ley y de la persona obligada con la del demandado; y tercero, interés, de conseguir el bien mediante la intervención del órgano público.

**7º.-** Que, por consiguiente, corresponde al juez determinar en la sentencia si la situación concreta que la demanda plantea está amparada o no por una norma legal, sea en forma expresa o implícita; determinar si existe una norma abstracta que contemple la situación jurídica de que se trata; si el hecho que el actor invoca corresponde a la categoría de los que esa norma considera y si la existencia del hecho está justificada.

La calidad de la acción dice relación con que ésta debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada, es decir, las partes en la relación jurídica sustancial. Ahora bien, la demostración de la existencia de la calidad invocada, que es activa cuando se refiere al actor y pasiva cuando se refiere al demandado, corresponde al actor, debiendo éste acreditar las condiciones de su acción, ya que a él incumbe demostrar su calidad de titular del derecho y la calidad de obligado del demandado. La falta de esa calidad, sea porque no existe identidad entre la persona del actor y aquella a quien la acción está concedida, o entre la persona del demandado y aquella a quien la acción está concedida, o entre la persona del demandado y aquella contra la cual se dirige, determina la procedencia de la defensa por falta de legitimidad.

Por consiguiente, la legitimación de la calidad de obrar no es un requisito para el ejercicio de la acción sino para su admisión en la sentencia. Si de los antecedentes no resulta legitimación activa o pasiva, la sentencia rechazará la demanda, no porque ésta haya sido mal deducida, sino porque la acción no corresponde al actor o contra el demandado.

Finalmente, no puede tampoco olvidarse que para intentar una acción, así como para contradecirla, es necesario tener interés, porque sólo con esa condición se pone en juego la actividad jurisdiccional. Eso no impide que en ciertos casos se permita el ejercicio de la acción, aun cuando aparentemente no se descubra un interés inmediato; en efecto, el interés consiste únicamente en que, sin la intervención del órgano público, el actor sufriría un perjuicio. Por consiguiente, la cuestión de saber si media o no un interés justificado constituye una situación de hecho, debiendo el juez ampararlo (sentencia Excma. Corte Suprema, causa rol 5.242-2003, año 2006).

**8º.-** Que, asentados los referidos principios doctrinarios, es de urgencia determinar si la acción de indemnización de perjuicios, consistente en el daño por



repercusión que se alega, fue entablada por quien tenía derecho a ella y, sobre este punto, es necesario tener claridad respecto a los conceptos que convergen en esta materia.

Respecto al daño reflejo o por repercusión, éste ha sido definido por la doctrina como el que nace a consecuencia del perjuicio provocado a una víctima inicial de un hecho ilícito y que afecta a personas diversas del sujeto inmediatamente perjudicado (“El daño por repercusión o rebote”; Fabián Elorriaga De Bonis, Revista Chilena de Derecho, vol. 26 N° 2).

Continúa el autor señalando que cuando se alude a la autonomía del daño por rebote, se quiere poner de manifiesto que se trata de un perjuicio, en principio, independiente del que afecta a la víctima inicial; quien resulta lesionado por repercusión reclama la reparación de un daño propio, ejerciendo un derecho originario. El perjuicio por rebote o reflejo es el que han experimentado personalmente otras personas diversas de la primera víctima a consecuencia de los mismos hechos; teniendo derecho a ser indemnizados todos aquellos que acrediten o prueben un daño, independientemente de su relación de dependencia o cercanía con la víctima. En rigor, estos sujetos no son víctimas inmediatas del hecho ilícito, ya que es de entera evidencia que el impacto esencial del suceso lesivo recayó sobre el personalmente lesionado. Sin embargo, a pesar de no haber sido afectados en su persona física, es de igual evidencia que ellos sufren un perjuicio a consecuencia del siniestro, al verse alcanzados en sus sentimientos, en su subsistencia o por los gastos en que deban incurrir derivados de los daños de la víctima inicial.

En ese escenario, del libelo de la demandante se desprende que ésta hace consistir el daño por repercusión demandado en el daño moral que le causó conocer y sufrir la detención ilegal y torturas a que fue sometido su cónyuge, hechos que se habrían producido entre septiembre de 1973 y mayo de 1974, lo que, de ser efectivo, permitiría encuadrarla en la hipótesis de víctima por repercusión a que se hizo referencia en los párrafos precedentes.

Para establecer lo anterior, se cuenta con la declaración de doña Juana María Bizama Vidal, quien señaló conocer a la demandante y a don Flavio Sepúlveda Sepúlveda, “*cuando íbamos a la cárcel, ya que ambas íbamos a ver a nuestros esposos*”, de lo que se desprende que la declarante es testigo abonada en lo que dice relación a la existencia de una relación sentimental que unía a la demandante con el Sr. Sepúlveda, ya que presenció tales visitas, dando cuenta que, a esa época, ya existía la mencionada relación entre ambos, pudiendo presumirse un grado significativo de importancia, ya que, dado el contexto histórico y el consabido temor ciudadano en todo aquello referido a las detenciones políticas, no puede estimarse que se tratase de algo pasajero o baladí, más aún si se considera que años después la demandante efectivamente contrajo matrimonio con Flavio Sepúlveda, a quien visitaba en la cárcel, como se comprueba con certificado de matrimonio de folios 1 y 31, con el que se acredita que la doña Sara



García San Martín y don Flavio Hernán Sepúlveda Sepúlveda contrajeron matrimonio con fecha 15 de febrero de 1980.

9º.- Que, de lo anteriormente señalado, resulta que la demandante se encuentra legitimada para interponer la acción de indemnización de perjuicios por el daño por repercusión alegado, toda vez que, como se dijo en el Considerando anterior, se encuentra acreditado en el proceso que la actora y don Flavio Hernán Sepúlveda Sepúlveda tenían una relación de pareja al momento en que se produjo la detención ilegítima y las torturas sufridas por éste, siendo por ello reconocido por el Estado de Chile como víctima de privación de libertad y torturas por razones políticas, en el informe de la Comisión Valech, siendo entonces plausible la eventual existencia de un daño de orden moral derivado del sufrimiento de una persona cercana, que pudo repercutir en la demandante. Y por otro lado, el origen del daño que se alega se encuentra en el actuar de los agentes del Estado, pudiendo por tanto dirigirse la acción en contra del Fisco.

Así las cosas, la excepción de falta de legitimidad activa deberá ser desechada.

10º.- Que, en cuanto a la procedencia de la indemnización de perjuicios por daño moral habrá de decirse que en reiterada jurisprudencia, la Excma. Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a las personas e imputable a otra.

En este punto, es necesario recordar que el daño moral debe ser probado por quien lo alega, toda vez que el daño constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por lo que aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia y entidad.

11º Que, sin perjuicio de lo señalado a propósito de la legitimación activa de la demandante, en la especie, el conjunto de antecedentes probatorios aportados se estiman insuficientes para adquirir convicción respecto de la entidad del daño moral que se alega y muy especialmente que dicho daño se haya generado producto del conocimiento de la detención ilegal y demás actos lesivos en contra de su marido, entendido como el dolor y aflicción que le causó conocer y sufrir la detención ilegal de su cónyuge.

En efecto, la prueba testimonial rendida se centra en la figura de don Flavio Sepúlveda, las circunstancias de su detención y la traumática experiencia vivida y sólo tangencialmente se hace referencia a la demandante. Así ocurre con ambas testigos. La primer testigo, doña Fidelisa Manríquez Ramírez, en lo pertinente, sólo declara conocer a la Sra. García y saber que pasaron muchas penas y situaciones que no se pueden ni siquiera contar, más no explica el origen de tales penurias. Luego, la única referencia que efectúa respecto de la demandante, es que su cónyuge la golpeó muchas veces “*porque quedó con daños y quedó agresivo*”, generándose conductas de violencia hacia su familia.



Lo mismo ocurre con la declaración de la testigo **Bizama Vidal**, quien sobre el particular declaró que Sara sufría mucho por los cambios de conductas de su cónyuge y que ella todavía está afectada por una depresión permanente porque cada vez que se toma el tema, lo recuerda y fue muy doloroso para ella; siendo ambas declaraciones muy escuetas en lo referido al daño moral de la demandante y, principalmente en cuanto al eventual origen del mismo, por lo que, como ya se indicó, resulta totalmente insuficiente para establecer que el daño sufrido por la actora provenga en definitiva del actuar de los agentes del Estado, no pudiendo establecerse la necesaria relación de causalidad entre ambas circunstancias.

Luego, si bien el informe pericial elaborado concluye que la peritada presentaría indicadores de daño intermitentes como sentimientos de angustia, desesperanza, frustración y anulación de contenidos amenazante al momento de rememorar experiencias de vida pasadas, el origen de ese daño también resulta difuso y poco concluyente, y más bien apunta en una hipótesis distinta, como es la violencia doméstica, ya que en el informe se indica que la vinculación establecida con su cónyuge da cuenta de una dinámica relacional alterada, por cuanto su convivencia se desarrollaba en un escenario de constante riesgo y amenaza que finalmente terminó con el ejercicio de violencia bidireccional y posterior normalización de la misma a través del tiempo.

Así, establecido en el informe la existencia de daños en la demandante, se indica que ello tendría un origen concausal por haber estado expuesta a escenarios de riesgo y amenazas para su integridad a nivel familiar desde el inicio de su relación de pareja, lo que permite concluir que los daños de que da cuenta el informe derivan más bien de episodios de violencia intrafamiliar de larga data, siendo insuficiente para establecer que el daño sufrido se haya generado a raíz de la angustia que le provocó el saber de la detención y torturas soportadas por su cónyuge, la referencia que hace el informe a que el daño tiene un origen indirecto al contexto social de la época, dada la ambigüedad de tal conclusión, y por ser necesario que el daño se derive del hecho que se postula en la demanda, lo que no se vislumbra en la especie, lo que conduce a rechazar la demanda en este punto.

**12º.-** Que, respecto de la excepción de intrasmisibilidad del daño moral, si bien ya se estableció que la demandante se encuentra habilitada para concurrir por sí en su calidad de víctima por repercusión –con independencia del éxito de dicha acción-, habrá que dilucidar si puede comparecer, además, como víctima directa en representación de su cónyuge fallecido por el daño moral por él sufrido, debiendo considerarse que la acción que persigue el daño reflejo (o por repercusión) debe ser distinguida de la que se tiene *iure hereditatis*, esto es, la que pertenece a la víctima inmediata que se adquiere por transmisión. Ambas acciones tienen por objeto perjuicios inequívocamente diversos en materia patrimonial, de modo que no existen discusiones acerca de la posibilidad de acumularlas, con la precaución de que un mismo daño no sea indemnizado más de una vez.



Sin embargo, tratándose del daño moral, existen fuertes razones para asumir que los herederos sólo pueden reclamar los perjuicios personalmente sufridos como daño reflejo, de modo que no pueden acumular al propio daño moral una pretensión indemnizatoria a título sucesorio por los daños morales que haya sufrido la víctima directa.

En esta línea, Barros Bourie concluye que la concurrencia cumulativa de acciones tiene el especial inconveniente de que las indemnizaciones por daño moral personal y a título hereditario se superponen necesariamente, porque en la aflicción de las personas más cercanas ya está incorporado el sufrimiento del fallecido. En efecto, en la medida que el daño moral reflejo tiene por justificación la particular relación afectiva del titular de la acción con la víctima directa, la indemnización que aquél reciba por el daño moral que personalmente ha sufrido incluye de manera necesaria el pesar por el sufrimiento de la víctima. (Tratado de Responsabilidad Extracontractual; Enrique Barros B. Editorial Jurídica, año 2006)

La indemnización por daño moral está dirigida a dar, a quien ha sufrido el daño, una satisfacción de reemplazo. Es bien evidente que, para cumplir verdaderamente esta función, la indemnización debe ser reclamada y obtenida por la víctima misma. Si lo es por sus herederos ello no aporta ningún alivio a los sufrimientos experimentados y no da ninguna satisfacción moral a quien los ha sufrido. Su sólo efecto sería permitir a los sucesores hacer dinero de un sufrimiento que no es el suyo y del que su autor tal vez no habría querido él mismo demandar reparación, lo que parece particularmente antipático, sino francamente inmoral (Ramón Domínguez A.; Revista de Derecho Universidad de Concepción N° 240, julio-diciembre 2016).

**13º.-** Que, efectuadas todas las disquisiciones anteriores, este juez cuenta con la convicción de que la actora no se encuentra habilitada para accionar en representación de su cónyuge por el daño por él sufrido, pues como ya se señaló, el hecho dañoso del cual es víctima una persona puede incluso llegar a afectar a terceros, que dado el vínculo o relación que tengan con la persona dañada pueden haber experimentado un dolor a causa del sufrimiento de ésta, pero este daño es uno completamente distinto y pertenece total y exclusivamente a ellos; en tanto, el daño moral sufrido por la víctima es personalísimo, toda vez que persigue compensar el mal soportado personalmente por la víctima, sólo su titular puede ser resarcido del daño que sufrió mediante una compensación económica, por tanto, no puede ser transmitido como pretende la demandante.

Por todo lo anteriormente expuesto, habrá de acogerse la excepción de intransmisibilidad del daño moral.

**14º.-** Que, así las cosas, deberá rechazarse la demanda impetrada, resultando inoficioso pronunciarse sobre las demás excepciones deducidas.

Por estas consideraciones y visto lo prevenido en la Constitución Política de la República y Tratados Internacionales señalados; artículos 4, 1.559, 1.568, 1.699, 1.700 y



1.706 del Código Civil; 144, 160, 161, 169, 170, 341, 342, 346, 348, 384, 426 y 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Leyes 18.575; 19.123; 19.980, Ley 19.992 y 20.874; Decreto N° 1086 de 2005; se declara:

I.- Que, **SE RECHAZA** la excepción de falta de legitimidad activa deducida por el Fisco de Chile a folio 7.

II.- Que **SE RECHAZA** la demanda de folio 1 deducida por Sara Rosa García San Martín y que se funda en el daño moral propio o por repercusión.

III.- Que **SE ACOGE** la excepción de intransmisibilidad del daño moral, deducida por la demandada en el folio 7, debiendo, por tanto, rechazarse la demanda interpuesta en el folio 1, en lo que dice relación con la pretensión de indemnización que deriva del daño moral sufrido directamente por Flavio Sepúlveda Sepúlveda y en calidad de heredera del causante referido.

IV.- Que, habiéndose rechazado la demanda por no haberse acreditado los presupuestos de la acción, se omite pronunciamiento respecto de las excepciones de reparación integral y de prescripción de la acción deducida.

V.- Que no se condena en costas a la parte demandante por estimar el tribunal que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y **CONSÚLTESE** si no se apelare.

**Rol 7000-2019.-**

Dictada por don **CÉSAR GUZMÁN ANDRADE**, Juez Suplente del Primer Juzgado Civil de Concepción.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Concepción, veintinueve de abril de dos mil veintidós**



